

## Editorial

# Estrategias sociales junto a las policiales

Por más que las estadísticas regionales indiquen una baja del 35% en los homicidios en comparación al año anterior, la percepción de seguridad en el Gran Concepción parece ir en la dirección contraria. Eso sí, hay razones concretas para ello: las balaceras en la vía pública, el uso de armas de fuego, el aumento de casos con características propias del crimen organizado y la participación de menores en algunos de estos hechos.

La Región del Biobío contabiliza este 2025 un total de 51 homicidios a la fecha. Aunque esta cifra represente un descenso en términos absolutos respecto al año anterior, los focos comunales nos muestran otra realidad. Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz han visto duplicar—incluso triplicar—sus cifras en relación al mismo periodo del año pasado. Esta concentración territorial del delito ha alterado la cotidianidad de sectores completos, como es el caso de la zona norte de Concepción, sector que desde la municipalidad penquista consideran de mayor preocupación por las balaceras que dejan víctimas fatales o heridos graves, según dijeron las propias autoridades.

Además, los delitos asociados a estos homicidios también han cambiado. Ya no hablamos, en su mayoría, de riñas espontáneas o conflictos. Hoy los crímenes son planificados, ejecutados por personas armadas que operan desde vehículos en movimiento, y que muchas veces están vinculadas al tráfico de drogas y a redes criminales organizadas. La figura del sicariato, casi impensable hace algunos años en la región, ya cuenta con al menos cinco casos investigados durante este año, de acuerdo a lo señalado desde la Fiscalía esta semana.

Ante este nuevo escenario, el trabajo de las policías y el Ministerio Público se ha visto forzado a adaptarse. La creación y fortalecimiento de unidades especializadas como el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECO) es una señal positiva, al igual que la formalización de varios imputados pertenecientes a clanes delictuales, lo que se espera tenga un efecto disuasivo. Sin embargo, la dificultad para obtener testimonios y denuncias por parte de las víctimas o testigos, muchas veces por temor o por estar directamente involucrados en el mundo delictual, ralentiza las investigaciones y deja muchos casos sin resolver.

Las respuestas institucionales siguen girando en torno a fórmulas que, si bien son necesarias, resultan insuficientes frente a la naturaleza cambiante del fenómeno delictual. El aumento de

patrullajes, el control de armas y los operativos antidrogas son medidas que ya se vienen anunciando desde años anteriores, sin que ello logre frenar el avance sostenido del crimen organizado en los territorios más vulnerables. En este caso se percibe que estos anuncios se repiten tras cada hecho de alto impacto, pero no consiguen modificar la sensación de inseguridad, ni entregar respuestas estructurales al problema.

Si bien la reunión entre el ministro de Seguridad, alcaldes del Gran Concepción y el delegado presidencial realizada a inicios de la semana puso en el centro la coordinación interinstitucional, reveló también una suerte de rutina reactiva frente a la violencia. Es una fórmula conocida que se solicita más presencia policial, más recursos para investigaciones y, nuevamente, se confía en el Plan Calle Sin Violencia como eje de acción. Pero cuando se produce un nuevo hecho se vuelve evidente que perseguir el delito solo desde la dimensión policial es una estrategia limitada.

La necesidad de trabajar en prevención social, en recuperación de espacios públicos, y en generar presencia estatal en sectores históricamente relegados sigue sin ocupar el centro de las solicitudes y estrategias. El fin de semana pasado, tres personas fueron asesinadas a balazos en Chiguayante, San Pedro de la Paz y Talcahuano. Estos hechos no solo dejan víctimas fatales, sino que

refuerzan la percepción más pesimista.

Mientras las autoridades nacionales apuntan a una baja global en la criminalidad, los municipios y las comunidades perciben lo contrario. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, lo resumió con claridad: "Si bien las cifras regionales son menores, hay un crecimiento exponencial en nuestra comuna".

Por otro lado, el rol de los municipios, aunque delimitado principalmente a la prevención, también está en el centro del debate. El trabajo conjunto con el gobierno y las policías debe fortalecerse no solo en el ámbito del control de armas, sino también en la recuperación de espacios públicos y la inversión social en las zonas más vulnerables.

Enfrentar la ocurrencia de homicidios en el Gran Concepción no es solo una tarea policial o judicial, sino un desafío estructural que exige coordinación interinstitucional, inversión sostenida y una política de seguridad que no niegue las percepciones ciudadanas, sino que las tome como punto de partida para generar soluciones reales.

**La necesidad de trabajar en prevención social, en recuperación de espacios públicos, y en generar presencia estatal en sectores históricamente relegados sigue sin ocupar el centro de las solicitudes y estrategias**